

Montevideo, 17 de mayo de 2024

Mesa sobre Situación Penitenciaria

I. Superpoblación y Hacinamiento

El crecimiento sostenido de la población penitenciaria de las últimas décadas ha generado un extendido problema de superpoblación en el sistema penitenciario y de hacinamiento crítico en la mayoría de los establecimientos.

En el año 2022 Uruguay fue revisado ante el Comité Contra la Tortura y el Comité Derechos Humanos. SERPAJ y junto con otras organizaciones de la sociedad civil presentó informes alternativos.

Respecto al hacinamiento, al 31 de diciembre de 2022 la población penitenciaria en nuestro país era de 14.497, alcanzando una tasa de prisionalización de 408 c/100.000 habitantes. Estas cifras muestran que nuestro país tiene la tasa más alta de prisionalización de América del Sur y una de las más altas del continente americano, situándose por encima de países como Colombia, México o Venezuela.

Mientras que en 2002 Uruguay contaba con una población carcelaria de alrededor de 5.000 personas privadas de la libertad, en las últimas dos décadas esta cifra se ha triplicado, con un crecimiento anual medio del 10%. Este aumento sostenido ha llevado al colapso del sistema, alcanzando para fines de 2023 la cantidad de 15.000 personas privadas de la libertad, población que con el tiempo seguirá creciendo, debido al aumento de penas y la estrategia de la política criminal de focalización en la persecución de los delitos callejeros y el reforzamiento de la presencia policial de choque y dispositivos de saturación de los barrios populares.

La tasa de hacinamiento es crítica en muchos de los centros. El hacinamiento, las carencias estructurales y de recursos, hacen que las condiciones de vida de muchas cárceles sean inhumanas. El 56% de las personas privadas de libertad del país no accede a una hora de patio al aire libre por día¹. La Unidad No. 5, Centro Metropolitano Femenino, tiene 165% de densidad de población. Reiterados informes del Comisionado Parlamentario señalan que el 5to nivel de la Unidad 5 no es un sector destinado a alojamiento permanente. Las carencias en el acceso a la salud, en particular para casos de padecimiento de problemas de salud mental, contradice todos los estándares internacionales mínimos para el respeto de los Derechos Humanos.

La situación de emergencia no ha sido revertida. El promedio de densidad según plazas habilitadas es de 129% (129 personas cada 100 plazas²), porcentaje de hacinamiento crítico que se dispara en los establecimientos del Área Metropolitana. El Informe del Comisionado

¹ Avance Informe Anual 2022 Comisionado Parlamentario.

² Dato al 31 de diciembre de 2022. Disponible en: <https://parlamento.gub.uy/cpp>

Parlamentario para 2021 detallaba que sólo un 10% del total de reclusos se encuentra en Unidades que reúnen las condiciones y oportunidades de rehabilitación e integración social, mientras que un 34% de la población penitenciaria pasa su reclusión en condiciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En el año 2022, en la Sexta Revisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a nuestro país, evaluando el cumplimiento con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego de la evaluación, el Comité de DDHH de la ONU realizó las siguientes observaciones referidas al tratamiento de las personas privadas de libertad en Uruguay:

*“El Estado parte debe incrementar sus esfuerzos con miras a: a) Asegurar que las personas en **prisión preventiva** estén efectivamente **separadas** de las **personas con condena**; b) Asegurar que todos los casos de **muertes bajo custodia sean investigados**; y que los autores de muertes provocadas sean enjuiciados y debidamente sancionados; c) **Reducir eficazmente el hacinamiento** y el elevado porcentaje de personas en prisión preventiva; **priorizar la imposición de medidas alternativas a la privación de libertad** de conformidad con las disposiciones del Pacto, y **priorizar las medidas sociales y educativas no privativas de libertad para las mujeres que hayan cometido delitos no violentos**; d) Velar por que **se evite, en la mayor medida posible, la detención preventiva de niños, niñas y adolescentes**, promoviendo el uso de medidas de sustitución que no impliquen privación de libertad y garanticen su rehabilitación y reintegración en la comunidad, tomando en cuenta su interés superior; y armonizar su legislación y sus prácticas en materia de adolescentes en conflicto con la ley con el Pacto y las normas internacionales. e) Mejorar las condiciones de detención garantizando que estas se ajusten a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) y a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), así como el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad conforme al artículo 10 del Pacto, con mayores recursos financieros y de personal adecuados”³.*

1. ¿Qué medidas considera prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario?

En general:

- Armonizar la normativa nacional a las Convenciones y Tratados internacionales (Protocolo de Estambul, Reglas mínimas para el tratamiento de Reclusos/Reglas Mandela, Reglas mínimas sobre las medidas no privativas de libertad/Reglas de Tokio), promoviendo medidas alternativas a la privación de libertad (como fuera observado por el Comité de Derechos Humanos en su quinto informe periódico de Uruguay en 2013 párrafo 9, y en las

³ Observaciones Generales al Estado uruguayo, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 28 de julio de 2022. Disponible en:

recomendaciones recientes del CAT), y un sistema de privación de libertad basado en unidades pequeñas cuya gestión sea pública, evitando la privatización del sistema carcelario

- Promover medidas sustitutivas a la privación de libertad. Establecer un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres, garantizando el acceso a derechos fundamentales, y contemplando las necesidades especiales de las mujeres madres con hijas e hijos.
- Evitar el encierro compulsivo, e implementar actividades educativas y laborales dentro y fuera de los establecimientos carcelarios.

Mujeres privadas de libertad:

- Evitar la aplicación de la pena privativa de libertad para las mujeres, cuando su vulnerabilidad socio penal y la entidad del delito cometido lo ameriten, y aplicar un régimen de prisión domiciliaria, asistida por los organismos competentes para la rehabilitación y reintegración social. En concordancia con las normas vigentes, en especial de los Arts. 228, 304 y 305 y concordantes del CPP, junto a las normas del sistema internacional que conforman la perspectiva de derechos humanos y género⁴.
- Garantizar condiciones mínimas de reclusión, como establecen Convenciones y Tratados a los que Uruguay adhiere, como la Convención de Belem do Para, en especial las Normas Mínimas para el tratamiento de las Mujeres Privadas de Libertad “Reglas de Bangkok
- Derogar el artículo 77 de la LUC que establece como agravante cuando el delito de venta de drogas tiene como lugar material el hogar. Reducir el número de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con el microtráfico de drogas.

2. ¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad?

⁴ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación hacia las Mujeres, Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Convención

sobre los derechos del Niño, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención de Belem do Para y, muy especialmente, las Normas Mínimas para el tratamiento de las Mujeres Privadas de Libertad “Reglas de Bangkok.

Joaquín Requena 1642,
11200 - Montevideo, Uruguay
Teléfono: (+598) 2408 53 01
serpaj.org.uy
serpajuy@serpaj.org.uy

3. ¿Qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso y/o la reincidencia a la cárcel? (suspensión condicional de la pena, libertad anticipada, redención de pena, políticas sociales)

- Derogar el artículo 34 de la LUC, que elimina la suspensión condicional del proceso y reduce los mecanismos de justicia restaurativa.
- Eliminar el proceso simplificado como un procedimiento que limita las garantías procesales de las personas imputadas.
- Cumplir con las garantías procesales y procedimentales relativas a los procesos abreviados, garantizando la asistencia letrada a las personas imputadas.
- Promover el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad.
- Brindar los recursos necesarios para garantizar el adecuado acceso a una defensa pública.
- Establecer un sistema articulado interinstitucionalmente para ofrecer un acompañamiento integral a las personas que egresan de la privación de libertad, acorde a sus necesidades en materia laboral, educativa (donde se permita garantizar la continuidad del proceso transitado en el encierro, - apoyo para continuar estudios universitarios, técnicos o secundarios), de vivienda, y revinculación social y familiar.

Joaquín Requena 1642,
11200 - Montevideo, Uruguay
Teléfono: (+598) 2408 53 01
serpaj.org.uy
serpajuy@serpaj.org.uy